

NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1155
30 abril 1974
ESPAÑOL

ORIGINAL: ESPAÑOL/FRANCES
INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
31º período de sesiones

INFORMES PERIODICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Informes sobre derechos económicos, sociales y culturales,
correspondientes al período comprendido entre el 1º de
julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, recibidos de los
gobiernos en virtud de la resolución 1074 C (XXXIX) del
Consejo Económico y Social 1/

	<u>Página</u>
Dahomey	2
El Salvador	10
Fiji	17
Filipinas	21
Israel	24
Kuwait	32
Rwanda	39

1/ Los informes reproducidos en este documento se recibieron antes del 31 de marzo de 1974.

DAHOMEY

/Original; francés/

/16 de febrero de 1974/

- I. Descripción preliminar concisa de las políticas generales de desarrollo económico y social que han contribuido significativamente a garantizar el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

A pesar de innumerables obstáculos, el Gobierno del Dahomey ha tratado siempre de promover, en el marco de su política general, el desarrollo económico y social del país, y de garantizar el reconocimiento, el goce y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Sin embargo, este esfuerzo recibió un impulso particularmente notable con el giro decisivo que para la nación significó la revolución del 26 de octubre de 1972, cuyos principios de acción, enunciados en el discurso-programa del Gobierno Militar Revolucionario de fecha 30 de noviembre de 1972, se ajustan plenamente a los imperativos socioeconómicos y culturales.

El mejor resumen preliminar que podría hacerse de nuestra política general consistiría en citas de ese documento.

Habida cuenta de que el mundo rural, que comprende a la gran masa de la población autóctona, contribuye en gran parte a la creación de las riquezas del país y en cambio sólo participa muy modestamente en su redistribución, desde el 26 de octubre de 1972 se adoptaron principios rectores para alcanzar una situación más satisfactoria:

A. Agricultura: una política de garantía y de mejoramiento del precio al productor, que implica:

1. La transformación del fondo de apoyo a los productos agrícolas en un organismo autónomo dotado de recursos importantes;
2. El repudio de la política de desviación de los recursos de dicho fondo en beneficio de sociedades privadas o del Estado;
3. La ampliación progresiva de las actividades de dicho fondo en beneficio de los productos de la agricultura, tanto de los productos industriales de exportación como de los productos comestibles destinados a la alimentación de las poblaciones.

B. Ganadería: una acción especial en favor de los pequeños ganaderos, en particular:

/...

La reparación y el mejoramiento de la infraestructura hidráulica ganadera existente, mediante la creación de nuevos pozos en las zonas que recorren los rebaños;

La organización y reglamentación de los mercados de ganado y de carne;

La asignación de mayores recursos a la medicina veterinaria preventiva;

La modernización de los mataderos y la elaboración de los productos de la ganadería, etc.

C. Industria: la transferencia gradual al Estado del control de los sectores vitales de la economía que condicionan el desarrollo del país, y la rápida explotación de los recursos para evitar que siga acaparándolos una ínfima minoría, lo que implica, entre otras cosas:

La creación de un verdadero complejo textil;

La creación de una industria farmacéutica;

La creación de una sociedad nacional de seguros y reaseguros.

E. Cultura:

La reforma de la enseñanza mediante el establecimiento de estructuras básicas, una enseñanza cuya orientación y contenido se ajusten a las necesidades del desarrollo económico y nacional;

La revalorización de las lenguas nacionales;

La rehabilitación de las culturas africanas y su adaptación a las necesidades de las masas trabajadoras;

La apertura de la Universidad del Dahomey a todas las formas del saber y a todas las corrientes contemporáneas del pensamiento científico, con un enfoque africano y, al mismo tiempo, universal.

F. Esparcimiento:

La creación de un Consejo nacional de espectáculos y actividades recreativas, que toma en consideración las iniciativas populares en materia de espectáculos;

La revalorización del deporte estimulando a los deportistas mediante la garantía de los medios de subsistencia;

El mejoramiento de la infraestructura y el equipo deportivos.

II. Influencia que ejercen los instrumentos de las Naciones Unidas en que constan principios y normas para el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, medidas adoptadas para aplicar tales instrumentos durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

Hay que destacar el respeto a las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas sobre el incremento de la cooperación interestatal que tienen una repercusión directa en la promoción económica e indirecta en el disfrute de los derechos económicos y sociales.

El Dahomey las ha cumplido asistiendo a las diversas conferencias que tenían esta finalidad (Organización de la Unidad Africana (OUA), países no alineados, búsqueda de nuevas fórmulas de cooperación subregional).

Entre los textos cabe citar:

1969

Decreto No. 69-315 PR, de 9 de diciembre de 1969, por el que el Dahomey se adhiere al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 31 de enero de 1967, (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 7, 1º de marzo de 1970, pág. 191).

1970

Ordenanza No. 70-41-CPMAE, de 8 de julio de 1970, por la que se aceptan las enmiendas introducidas en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 17, 15 de julio de 1970, pág. 488).

Ordenanza No. 70-43 - CP-MAI, de 25 de septiembre de 1970, por la que se ratifica el tratado de amistad, de cooperación y de asistencia mutua firmado el 19 de agosto de 1970 entre el Dahomey y Nigeria (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 23, 15 de octubre de 1970, pág. 730).

1971

Ordenanza No. 71-44, de 29 de septiembre de 1971, por la que se ratifica el Convenio general de seguridad social de los trabajadores migrantes de la Organización Común Africana, Malgache y Mauriciana (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 23, 15 de noviembre de 1971, pág. 810).

1972

Ordenanza No. 72-27, de 9 de septiembre de 1972, por la que se ratifica el acuerdo de crédito para el desarrollo del proyecto algodón Zou-Borgou entre la República del Dahomey y la Asociación Internacional de Fomento, de fecha

24 de mayo de 1972 (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 21, 15 de octubre de 1972, pág. 798).

1973

Ordenanza No. 73-6, de 23 de enero de 1973, por la que se ratifica la Convención de la OUA que rige los aspectos concretos de los problemas de refugiados en Africa, firmada en Addis-Abeba a 6 de septiembre de 1969 (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 5, 1.º de marzo de 1973, pág. 163).

Ordenanza No. 73-44, de 9 de mayo de 1973, por la que se ratifica el acuerdo sobre comercio, protección de las inversiones y cooperación técnica entre la República del Dahomey y la Confederación Suiza, firmado en Cotonou el 20 de abril de 1966 (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 11, 1.º de junio de 1973, pág. 507).

III. Acontecimientos de importancia en relación con el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, con referencia, en su caso, a las disposiciones constitucionales, las medidas legislativas y los reglamentos y procedimientos administrativos promulgados y los fallos dictados por los tribunales

A. El derecho al trabajo

1. Derecho a la libre elección del trabajo.

Supresión en 1972 por el Gobierno Militar Revolucionario de los "campamentos colectivos" establecidos por los regímenes políticos precedentes, pero denunciados por la OIT como instituciones encubiertas de trabajo forzoso.

2. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Observancia estricta de la semana de 40 horas de trabajo.

3. Derecho a la protección contra el desempleo y el empleo insuficiente.

Vigilancia de los servicios nacionales en esta esfera, y prohibición de las agencias privadas de colocación.

4. Derecho de toda persona que trabaja a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, condiciones de existencia digna.

Véase el discurso-programa del 30 de noviembre de 1972: "Se trata de construir en nuestro país una sociedad en la que sea agradable vivir porque todos disponen del mínimo necesario para una existencia digna. Una sociedad en la que se hayan mitigado las desigualdades de ingresos, en espera de poder hacer otro tanto con las desigualdades de fortuna".

/...

8. Derecho de huelga.

Véase la Ordenanza No. 69-14 PR, de fecha 19 de junio de 1969, relativa al ejercicio del derecho de huelga (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 15, 23 de junio de 1969, pág. 438).

- B. El derecho a la seguridad social, incluso al seguro social en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad

1969

Decreto No. 69-209, de 9 de agosto de 1969, por el que se fija la escala de subsidios familiares (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 21, 1º de septiembre de 1969, pág. 592).

Para los establecimientos públicos y semipúblicos, véase el Decreto No. 69-261 PR, de 15 de octubre de 1969 (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 24, 15 de octubre de 1969, pág. 772).

1970

Ordenanza No. 70-17 D, de 25 de marzo de 1970, por la que se instituye un régimen general de seguridad social (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 10, 19 de abril de 1970, pág. 267), modificada por la Ordenanza No. 71-10 CP, de 10 de marzo de 1971 (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 8, 15 de marzo de 1971, pág. 313).

- C. El derecho a un nivel de vida adecuado

1970

1. Derecho a una alimentación adecuada.

Ordenanza No. 70-29, de 28 de abril de 1970, por la que se completa la Ordenanza No. 12 PR, de 21 de mayo de 1967, por la que se establecieron tasas de estabilización y de apoyo con respecto a varios precios (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 15, 15 de junio de 1970, pág. 406).

2. Derecho a vestido y vivienda adecuados.

Véase el discurso-programa, de 30 de noviembre de 1972, que se ha aplicado de modo efectivo en esta esfera: "La rescisión de todos los arrendamientos administrativos, la armonización de las indemnizaciones de vivienda a los derechohabientes y la construcción de edificios administrativos y de viviendas de alquiler moderado (HLM)".

/...

3. Derecho a los servicios sociales necesarios.

Dotación de dichos servicios sociales a los distintos departamentos ministeriales; por ejemplo: la Ordenanza No. 70-34, de 28 de febrero de 1970, por la que se determinan las atribuciones de la Oficina de Asuntos Sociales del Ministerio de Justicia y de Legislación (Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 7, 1º de marzo de 1970, pág. 208).

4. Derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia.

La descongelación parcial de los salarios efectuada en noviembre de 1972.

5. Derecho a la protección y al mejoramiento del medio humano.

Participación del Dahomey en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Suecia.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Medidas adoptadas a fin de asegurar:

1. La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el logro del sano desarrollo de los niños.

Multiplicación de los servicios de puericultura, con un servicio especial para niños prematuros en Porto-Novo.

2. El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

Continuación de los esfuerzos iniciales.

3. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.

Decreto No. 71-28 CP-MAPAS, de 17 de febrero de 1971, por el que se crea y organiza el Comité Nacional Raoul Follereau.

4. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

El mejor funcionamiento posible de los hospitales; la creación de dispensarios y enfermerías; convenio entre el Gobierno del Dahomey y la Orden Militar de Malta para el establecimiento de una leprosería en Djougou.

E. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

1. Ninguna novedad que indicar.

2. Ninguna novedad que indicar.
3. Ninguna novedad que indicar.
4. Derecho de los padres a determinar libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos.

Progresos apreciables en materia de información sobre la planificación de la familia en el Dahomey.

F. El derecho a la educación

1. Derecho a la enseñanza primaria gratuita.

Véase el discurso-programa de 30 de noviembre de 1972, que ya se ha llevado efectivamente a la práctica:

"Intervenciones eficaces del Estado, consistentes sobre todo en lograr, para las escuelas privadas, tanto laicas como religiosas, y en particular las católicas, soluciones satisfactorias a los difíciles problemas que se plantean al personal docente" (entre otras medidas, el Estado se ha hecho cargo de la remuneración de dicho personal).

2. Derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad o el mérito, incluso la enseñanza técnica, vocacional y profesional.

Siempre se ha protegido: ninguna novedad que indicar.

3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos.

Respetado en el Dahomey: ninguna novedad que indicar.

G. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural

1. Derecho a tomar parte en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

El Gobierno se esfuerza por desarrollar la cultura popular mediante la organización de la alfabetización de las masas en las lenguas nacionales.

2. Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas.

El Gobierno proyecta establecer un instituto de lingüística con la misión de determinar el modo de suprimir los obstáculos a la utilización de las lenguas nacionales como vehículo del saber.

- IV. Medidas encaminadas a asegurar que disfrute de los derechos mencionados en la parte III supra una proporción cada vez mayor de la población, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole; origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

Todo el discurso-programa de 30 de noviembre de 1972, citado frecuentemente en este documento, está consagrado a esta cuestión.

- V. Dificultades con que se ha tropezado al asegurar el disfrute de los derechos mencionados en la sección III supra, y medidas y métodos adoptados para vencerlas

Estas son las habituales dificultades propias de la situación de todo país insuficientemente desarrollado: falta de recursos financieros, de recursos técnicos o de personal.

Los métodos o medidas son los de la nueva política de independencia nacional, cuyo fundamento reside en la africanización.

EL SALVADOR

/Original: español/

/25 de marzo de 1974/

I. Descripción preliminar concisa de las políticas generales de desarrollo económico y social que han contribuido significativamente a garantizar el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

Durante el período de que se trata, el Gobierno de El Salvador ha dictado las medidas que ha considerado necesarias para garantizar eficazmente el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de que deben gozar los habitantes de la República, pudiéndose citar como hechos sobresalientes la promulgación de un nuevo Código de Comercio, que incluye en su texto nuevas instituciones mercantiles y regula en forma eficaz no solamente los derechos económicos de los comerciantes, sino los de todas aquellas personas que intervienen en los actos mercantiles; y la promulgación de un nuevo Código de Trabajo que establece en forma notoria la protección de que deben gozar los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

También ha fomentado el cooperativismo por medio de una Ley General de Asociaciones Cooperativas y el establecimiento del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, así como con la creación de un Fondo de Garantía para la pequeña industria.

En el aspecto cultural se ha dictado una Ley General de Educación que determina las características generales del sistema educativo nacional, en todos los niveles y campos de la educación y se ha creado un Fondo de Garantía para el crédito educativo.

Además, se ha promulgado la Ley del Fondo Social para la Vivienda y se han dictado otras leyes que tienen íntima relación con los derechos económicos, sociales y culturales y que por orden cronológico se detallan en el anexo de este informe.

II. Influencia que ejercen los instrumentos de las Naciones Unidas en que consten principios y normas para el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, medidas adoptadas, para aplicar tales instrumentos durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

Se reconoce que los principios y normas contenidos en los instrumentos de las Naciones Unidas han ejercido influencia en la política de desarrollo económico, social y cultural de El Salvador.

En informe posterior se podrá hacer una mención detallada de las medidas adoptadas para aplicar tales instrumentos, durante el período mencionado.

/...

III. Acontecimientos de importancia en relación con el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, con referencia, en su caso, a las disposiciones constitucionales, las medidas legislativas y los reglamentos y procedimientos administrativos promulgados y los fallos dictados por los tribunales

A. El derecho al trabajo

1. Derecho a la libre elección del trabajo.

En consonancia con el Artículo 181 de la Constitución Política de El Salvador, que establece que el trabajo es una función social y que no se considera artículo de comercio, existe en este país una absoluta libertad en la elección del trabajo; y solamente, al igual que en otros países, existen algunas restricciones respecto al trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años, el cual debe ser especialmente adecuado a su sexo, edad, estado físico y desarrollo.

2. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

El Código de Trabajo establece regulaciones que garantizan el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. En efecto, dicho cuerpo de leyes regula la forma de celebrar los contratos de trabajo, los cuales se entiende que son de duración indefinida, excepto en los casos que la ley determina expresamente. Además establece dicho Código las obligaciones y prohibiciones de los patronos; las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores; la suspensión del contrato de trabajo y las diferentes causales de terminación del contrato de trabajo; la indemnización por despido, etc.

3. Derecho a la protección contra el desempleo y el empleo insuficiente.

Aunque no existen en la actualidad disposiciones que aseguren la protección contra el desempleo o empleo insuficiente, la Ley del Seguro Social establece en el Artículo 2 que el Seguro cubrirá en forma gradual los riesgos a que están expuestos los trabajadores por causa de cesantía involuntaria.

4. Derecho de toda persona que trabaja a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, condiciones de existencia digna.

De conformidad con el Artículo 182 de la Constitución Política de la República, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente, atendiendo sobre todo, al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración y a las distintas zonas de producción, salario que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.

Este principio constitucional, está desarrollado en el Código de Trabajo, en el cual se crea también el Consejo Nacional de Salario Mínimo.

/...

5. Derecho de toda persona, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Sobre este aspecto, el Artículo 123 del Código de Trabajo establece, que los trabajadores que en una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, desarrollen igual labor, devengarán igual remuneración, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad.

6. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Sobre estos puntos, el Código de Trabajo establece que la jornada de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales, no excederá de ocho horas diarias, ni la nocturna de siete. La semana laboral diurna no excederá de cuarenta y cuatro horas, ni la nocturna de treinta y nueve. Además, todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, y después de un año de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la dependencia de un mismo patrono, a un período de vacaciones cuya duración será de quince días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente al salario ordinario correspondiente a dicho lapso más un 30% del mismo. Goza también de días de asueto remunerados.

7. Derecho a fundar sindicatos y afiliarse al sindicato de su elección.

De acuerdo con el Artículo 204 del Código de Trabajo, los trabajadores privados y los de las instituciones oficiales autónomas o semiautónomas, tienen el derecho de asociarse libremente para formar asociaciones profesionales o sindicatos, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas.

8. Derecho de huelga.

El derecho de huelga está consignado en el Artículo 192 de la Constitución Política y regulado en el Código de Trabajo.

B. El derecho a la seguridad social, incluso al seguro social en caso de desempleo; enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia, por circunstancias independientes de la voluntad

De acuerdo con el Artículo 186 de la Constitución Política de la República, la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. En virtud de esta disposición, se ha establecido en el país el seguro social obligatorio como una Institución de Derecho Público que realiza los fines de seguridad social. Durante el período que comprende este informe, se ha hecho extensivo el seguro social a todos los trabajadores de la empresa privada en casi la totalidad de las poblaciones de la República y cubre los riesgos a que están expuestos los trabajadores por causa de enfermedad, accidente común, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte, y, además, como antes se ha expresado, se establece en el Artículo 2 de la ley respectiva, que cubrirá en forma gradual, los riesgos por cesantía involuntaria.

Por otra parte, el Código de Trabajo establece en el Artículo 360 la obligación que tienen los patronos de asegurar con compañías de seguros, a aquellos trabajadores de empresas que se dediquen a actividades que por su propia naturaleza o por circunstancias especiales ofrezcan un peligro para la salud, la integridad física o la vida de dichos trabajadores, a juicio de la Dirección General de Previsión Social, y en todo caso, cuando se trate de labores peligrosas que pueden ocasionar la muerte o dañar de modo inmediato y grave la integridad física de aquéllos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 106 del mismo Código.

C. El derecho a un nivel de vida adecuado

1. Derecho a una alimentación adecuada.

En el período a que se refiere este informe, se han dictado disposiciones legales en relación con la alimentación de los trabajadores del campo.

2. Derecho a vestido y vivienda adecuados.

Reconociendo el derecho que tienen las personas a gozar de una vivienda adecuada, el Gobierno ha continuado su labor por medio del Instituto de Vivienda Urbana, y la Financiera Nacional de la Vivienda con su sistema formado por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. También existen asociaciones privadas con este fin.

Puede igualmente señalarse como hecho sobresaliente, la creación del Fondo Social para la Vivienda, que tiene como objetivo contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras.

3. Derecho a los servicios sociales necesarios.

Puede afirmarse que todos los habitantes del país tienen derecho a los servicios sociales que presta el Estado.

4. Derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia.

También puede afirmarse que todas las personas que habitan en el territorio de la República, tienen derecho a una mejora de las condiciones de su existencia.

5. Derecho a la protección y al mejoramiento del medio humano.

Igualmente puede asegurarse que todos los habitantes tienen derecho a la protección y al mejoramiento del medio humano.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Se han adoptado medidas a fin de asegurar:

1. La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el logro del sano desarrollo de los niños.

2. El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

En cuanto a la higiene del trabajo, el Código de Trabajo establece las medidas que deben adoptarse y ponerse en práctica para la seguridad e higiene en los lugares de trabajo, para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de los trabajadores. Además, se ha emitido el Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de los Centros de Trabajo.

3. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.

4. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

E. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

1. Derecho de la familia a protección y asistencia.

El Artículo 179 de la Constitución Política establece que la familia, como base fundamental de la sociedad, debe ser protegida especialmente por el Estado, el cual dictará las leyes y disposiciones necesarias para su mejoramiento, para fomentar el matrimonio y para la protección y asistencia de la maternidad y de la infancia.

2. Derecho de las madres a cuidados y asistencia especiales.

Por medio de los centros de salud y asistenciales, el Estado presta servicios y cuidados a las madres; y además funcionan en el país guarderías infantiles que permiten que las madres puedan dedicarse a sus ocupaciones.

3. Derecho de los niños y los jóvenes a cuidados y asistencia especiales.

El citado Artículo 179 de la Constitución Política establece que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia.

4. Derecho de los padres a determinar libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos.

En El Salvador, los padres gozan del derecho de determinar libremente el número de hijos que pueden procrear y el espaciamiento de los nacimientos. No obstante, existe una entidad denominada Asociación Demográfica Salvadoreña, cuyo principal objetivo es el de educar a los habitantes a efecto de lograr una paternidad responsable.

F. El derecho a la educación

1. Derecho a la enseñanza primaria gratuita.

El Artículo 198 de la Constitución Política establece que todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación básica que los capacite para desempeñar consciente y eficazmente su papel como trabajadores, padres de familia y ciudadanos. Además, dice que la educación básica incluirá la primaria, la cual, cuando la imparta el Estado, será gratuita.

El precepto constitucional antes citado, ha sido ampliamente desarrollado en la Ley General de Educación, emitida en el período a que se refiere este informe.

2. Derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad o el mérito, incluso la enseñanza técnica, vocacional y profesional.

En El Salvador, toda persona tiene derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, tal como aparece consignado en la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, promulgada en el período que comprende este informe.

3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

De acuerdo con las disposiciones del Código Civil, los padres tienen el derecho de orientar la profesión futura del hijo y de dirigir su educación del modo que crean más conveniente a él. Pero no podrán, llegado el hijo a la edad de 18 años, oponerse a que abraza una carrera honesta.

G. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural

1. Derecho a tomar parte en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

En El Salvador, toda persona tiene absoluta libertad para tomar parte en la vida cultural y para gozar de los beneficios resultantes del progreso científico y de sus aplicaciones.

2. Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas.

Igualmente están debidamente protegidos los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas.

IV. Medidas encaminadas a asegurar que disfrute de los derechos mencionados en la parte III supra una proporción cada vez mayor de la población, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

Al informar detalladamente sobre los derechos a que se refiere la parte III, se han citado los preceptos constitucionales y legales que garantizan tales

/...

derechos. Las medidas que se han tomado a efecto de que una proporción cada vez mayor de los habitantes goce de aquéllos, y que sería prolijo enumerar, están encaminadas al estricto cumplimiento de los expresados preceptos, y se han aplicado sin tomar en cuenta las condiciones de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición de los habitantes del país.

V. Dificultades con que se ha tropezado al asegurar el disfrute de los derechos mencionados en la sección III supra, y medidas y métodos adoptados para vencerlas

Tómando en cuenta que los preceptos constitucionales y legales que garantizan el disfrute de los derechos comprendidos en la parte III, son de aplicación obligatoria, puede afirmarse que en forma general no se han presentado dificultades para su cumplimiento; y en los casos de incumplimiento de dichos preceptos que han dado origen a conflictos individuales o colectivos, sobre todo en materia laboral, han sido las autoridades administrativas o los tribunales de trabajo quienes de conformidad con la ley, han resuelto tales conflictos*.

* La lista de leyes pertinentes incluida como anexo del presente informe puede consultarse en los archivos de la Secretaría.

FIJI

/Original: inglés/

/6 de marzo de 1974/

No se han introducido cambios recientemente en las leyes relativas a los asuntos que se examinan. Al parecer, la Constitución de Fiji de 1970, fuera de la legislación que se menciona más adelante, es el único acto legislativo pertinente.

A. El derecho al trabajo

En la legislación de Fiji no existe limitación al ejercicio de los derechos pertinentes, salvo, por supuesto, que se puede considerar que el derecho a la huelga fue racionalizado por la ley denominada Trade Disputes Act, de 1973, para excluir de tal derecho la acción antisocial e irresponsable, que comprende varias categorías prohibidas. Por lo menos uno de los derechos mencionados, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al sindicato de su elección, está protegido por la Constitución. La libertad de reunión y de asociación está expresamente protegida. Otros derechos, tales como el derecho a no ser objeto de discriminación en materia de empleo, no están protegidos explícitamente por la Constitución de Fiji, pero ninguna ley de Fiji los restringe.

B. El derecho a la seguridad social, incluso al seguro social en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdidas de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntadC. El derecho a un nivel de vida adecuadoE. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

A los efectos del presente informe, y por conveniencia, estos tres temas (B, C, E) se examinarán conjuntamente.

1. No existe en Fiji ningún plan de seguridad social como tal, pero existe el Fondo de Previsión Nacional de Fiji que fue creado en 1966. En virtud de este Fondo, al final de su vida de trabajo un trabajador recibe una suma global o, en el curso del tiempo, una renta vitalicia. Ello puede producirse en caso de retiro, de muerte o de invalidez total. La suma global es una acumulación de las aportaciones del empleador y del empleado (5% del salario cada uno) y los intereses que devenguen. En la Ordenanza se prevé también una prestación de matrimonio para trabajadoras y una prestación por fallecimiento para las viudas de los afiliados que hayan reunido los requisitos necesarios. Se llevan registros personales y el Fondo es administrado por una Junta independiente.

/...

2. La ley exige que sea afiliado al Fondo todo empleado (excepto los servidores domésticos) que trabaje para un empleador más de 12 días al mes, y que tenga entre 15 y 55 años de edad.

3. El otro tipo de asistencia financiera gubernamental a que tienen acceso los ciudadanos se prevé en el Plan de Asistencia Familiar. Este tuvo su origen el siglo pasado como plan para ayudar a indios indigentes contratados, pero actualmente tienen acceso al mismo todos los ciudadanos de Fiji. Desde 1969 el plan ha sido administrado por el Departamento de Bienestar Social, cuyos funcionarios investigan los casos y recomiendan que se pague o no una prestación. El criterio básico respecto de la ayuda ha sido siempre la indigencia real, aunque los límites de esta definición se han hecho algo borrosos y su campo se ha ampliado. Las categorías principales de personas que actualmente reciben asistencia son los ancianos y viudos, aunque el plan se sigue considerando como un último recurso para los realmente necesitados, y el nivel de las prestaciones es bajo.

4. Se estima que, por conveniente que sea, Fiji no puede permitirse aún el lujo de tener un plan de asistencia pública análogo a los de los países desarrollados, y se procura alentar a la comunidad a ayudar a sus miembros necesitados, como ha sido la práctica tradicional en el pasado. Además, el número de personas que solicitan y reciben asistencia ha ido creciendo continuamente y esto, junto con la preocupación relativa a los criterios y la administración actuales del plan, y el tiempo que requiere de los funcionarios de bienestar, ha llevado al Ministerio de Bienestar Social a crear un Grupo de Trabajo encargado de revisar el plan y sugerir otras posibilidades. Se espera que este Grupo de Trabajo presente su informe a comienzos de este año.

1. El objetivo principal del Departamento de Desarrollo y Bienestar Sociales es emplear sus servicios para apoyar a la familia en la comunidad y, por lo tanto, se interesa en promover el bienestar de la población de todas las edades. Los servicios que provee para ayudar a la persona o la familia a adaptarse mejor a las expectativas de la sociedad se refiere a la libertad vigilada, el matrimonio, el cuidado y la protección del niño, la adopción, la delincuencia y una ayuda limitada para el socorro en casos de indigencia (véase B2). Los funcionarios de bienestar también pueden tener que recurrir a la autoridad de los tribunales, pero en un gran número de casos, con la ayuda de los ciudadanos locales, los recursos de la comunidad y las organizaciones voluntarias, se puede llegar a un grado satisfactorio de arreglo.

2. No existe disposición alguna del Gobierno para la prestación de servicios de puericultura que permitan a las mujeres seguir una carrera, si bien la administración pública tiene generosas disposiciones en materia de licencia de maternidad para sus empleadas.

3. La promulgación de la ley denominada Juveniles Act en 1973 representó un gran avance. Esta ley dispone que se considerará que todo joven que sea llevado ante los tribunales, por cualquier motivo, "necesita ayuda" y, por lo tanto, deberá ser puesto al cuidado del Director de Bienestar Social, quien decidirá sobre un lugar de seguridad adecuado, que podrá ser el actual hogar para niños (a cargo de organizaciones voluntarias), la Escuela Aprobada (a cargo del Gobierno), un pariente u otra persona adecuada.

C) Interesa al Gobierno de Fiji que se mantenga un nivel de vida adecuado, y hay que hacer esfuerzos especiales cuando ocurren desastres naturales, a los que está particularmente expuesta esta zona del mundo, tales como huracanes y ciclones. Después de tales casos el Gobierno distribuye alimentos, ropa y alojamiento temporal cuando es necesario, y también provee ayuda financiera para la reconstrucción de casas destruidas por los huracanes. También da ayuda menos directa al prestar apoyo financiero a las organizaciones voluntarias, algunas de las cuales distribuyen comida y ropa a las personas necesitadas, y se espera que pronto pueda establecer, en el Departamento de Bienestar Social, un registro central de personas y familias que reciban este tipo de ayuda.

2. La Women's Interest Office presta otros servicios relacionados con la alimentación. Entre otras materias, los funcionarios enseñan nutrición, economía doméstica y el cultivo y preparación de alimentos a grupos de mujeres y clubes en todo Fiji.

3. Un proyecto de ley - titulado The Harbour Amendment Bill - puede contribuir en gran medida a proteger a la comunidad contra el vertimiento de petróleo de los buques.

F. El derecho a la educación

1. En 1973 se dispuso en Fiji que se impartiera educación primaria gratuita a todos los niños del primer ciclo. En 1974 esta disposición se amplió para incluir a los alumnos del segundo ciclo, y en 1975 se agregará el tercer ciclo a la lista de grupos que reciben educación gratuita. Esta disposición se irá extendiendo un nuevo ciclo cada año, de modo que para 1978 se proporcionará educación primaria gratuita a todos los niños de escuela primaria.

2. Todos los niños de Fiji tienen derecho a la igualdad de acceso a la educación superior sobre la base de su capacidad o mérito, incluida la enseñanza de oficios, la técnica, y la profesional. Se otorgan plazas gratuitas, o parcialmente gratuitas y becas a los estudiantes meritorios cuyos padres no están en condiciones de sufragar los gastos de su educación.

3. Los padres tienen plena libertad para escoger el tipo de educación que se ha de dar a sus hijos. Cualquier limitación que pudiera imponerse a esta libertad tendría que ser de naturaleza geográfica, debido a que un padre no puede enviar a su hijo a la escuela de su elección a causa de la distancia o de otros factores físicos.

4. Los asuntos como los mencionados en el inciso 3 están previstos en la actual Ordenanza sobre la educación. En el período de que se trata no se ha producido cambio alguno en esta esfera.

/...

G. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural

1. No hay en vigor restricción alguna respecto de este derecho y, en efecto, la Constitución de Fiji garantiza la libertad de expresión y de conciencia.
2. El inciso 2 está previsto en las leyes actuales relativas a la propiedad intelectual.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

1. Tanto la tasa de mortalidad como la de mortalidad infantil se han reducido mediante el mejoramiento de la atención prenatal. Casi todas las mujeres embarazadas asisten a clínicas prenatales, y la proporción de partos en hospitales ha aumentado en el período transcurrido hasta diciembre de 1972. El 82,8% de todas las madres dio a luz en hospitales, en tanto que el 8,2% dio a luz en su casa con asistencia de parteras capacitadas. Las cifras correspondientes a 1970 fueron de 75,9% y de 11,6%, respectivamente. La tasa de mortalidad infantil fue de 40,95% calculada con arreglo a un método revisado de reunión de datos más exactos, en comparación con las cifras del Registro General correspondientes a años anteriores.
2. El saneamiento del ambiente se concentra en el suministro de agua potable pura y la eliminación adecuada de desperdicios. En el campo de la educación, se ha continuado el proyecto de saneamiento escolar como método para inculcar hábitos sanitarios.
3. Existen en Fiji veinte enfermedades epidémicas, además de la influenza, todas las cuales son benignas y no letales. Se ha llegado a controlar eficazmente la tuberculosis y la lepra, que son enfermedades endémicas.
4. Todos los ciudadanos de Fiji pueden recurrir en todo momento a los servicios médicos, sea cual fuere su capacidad de pago. Se hace especial hincapié en la prestación de servicios a la población de las zonas rurales.

E. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

1. -
2. Las madres continúan disfrutando de prerrogativas especiales, en el sentido de que la asistencia a clínicas prenatales es gratuita.
3. Los niños menores de 15 años de edad reciben atención médica gratuita, sean ellos pacientes internos o externos. Todos los niños de menos de 18 años reciben atención odontológica gratuita.
4. En Fiji, el programa de planificación de la familia se basa en el principio de la libre elección de las parejas en cuanto al número de hijos y al espaciamiento de los nacimientos.

/...

FILIPINAS

/Original: inglés/

/24 de enero de 1974/

Informe preparado por la Comisión de Integración Nacional de Filipinas sobre los principales acontecimientos relativos al reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías nacionales de Filipinas, correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973:

"1) Garantías constitucionales en la Nueva Constitución: Sección II del Artículo XV: "El Estado tendrá en cuenta las costumbres, tradiciones, creencias e intereses de las comunidades culturales nacionales al formular y aplicar las políticas estatales".

Por el texto citado se cambió asimismo la expresión general "minorías culturales nacionales" por "comunidades culturales nacionales".

2) Programa gubernamental de reconstrucción y desarrollo (Mindanao musulmán), que abarca las nueve provincias en que predomina la población musulmana, a saber: Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato Septentrional, Maguindanao, Sultan Kudarat, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sulu y Tawi-Tawi. El programa de reconstrucción y desarrollo tiene como objetivo los problemas inmediatos que afectan a Mindanao musulmán, los cuales corresponden a las dos esferas generales siguientes:

a) el lento crecimiento de la economía, y la existencia de un pequeño sector opulento junto a un gran grupo de subsistencia, y

b) el deterioro de la paz y el orden, que ha causado cientos de miles de evacuados, paralizado la agricultura y la industria, y retrasado los intentos de lograr un desarrollo socioeconómico más rápido. Además, se prevén la construcción y el mejoramiento de puertos, obras de regadío, carreteras, electrificación, distribución de tierras, producción de alimentos, vivienda, sanidad, educación y capacitación de mano de obra, obras de infraestructura y su financiación.

3) Extensión a los miembros de las minorías culturales nacionales de las condiciones favorables de elegibilidad para la administración pública, a los efectos de los nombramientos para cargos gubernamentales y de beneficiar a dichos miembros de las minorías culturales en los casos de nombramientos para cargos en las provincias y ciudades, con arreglo a la Sección 23 de la Republic Act 2260.

/...

- 4) Aumento de los créditos consignados para el otorgamiento de becas gubernamentales a miembros de las minorías culturales nacionales de 3,5 a 10,5 millones de pesos filipinos, haciendo así posible que el número de tales becas o subsidios oficiales aumente de 2.500 anuales a más de 4.000.
- 5) Proclamación de siete (7) nuevos asentamientos para miembros de las comunidades culturales nacionales.
- 6) Nueva aplicación y liberalización del comercio de trueque de Sulu, merced a lo cual los comerciantes pueden enviar en carácter de trueque o de pago parcial mercaderías o artículos, excepto los que constituyan contrabando o estén prohibidos, cuyo valor no exceda de 5.000 pesos filipinos por viaje y sin pasar de dos viajes por mes, que actualmente no están gravados con derechos de importación o impuestos cuando son vendidos o consumidos en Jolo o en la ciudad de Zamboanga, y que pagan impuestos únicamente si son sacados de esas zonas.
- 7) Creación y organización de Philippines Amanah-Bank en Mindanao para atender a las necesidades bancarias y financieras de las zonas musulmanas de Mindanao y Sulu; el personal del banco estará constituido predominantemente por miembros calificados de las minorías culturales nacionales.
- 8) Codificación y estudio del derecho consuetudinario musulmán para su posible incorporación al derecho vigente del país.
- 9) Establecimiento del Centro musulmán de información, con objeto de difundir ampliamente a la población una información provechosa y pertinente para su utilización nacional e internacional.
- 10) Nombramiento preferencial de musulmanes calificados para cargos en el servicio exterior, la administración de justicia y otros altos cargos gubernamentales nacionales.
- 11) Otorgamiento de asistencia financiera y préstamos sin garantía a musulmanes ocupados en la industria pesquera de las islas del archipiélago de Sulu, las ciudades de Basilan y Zamboanga y las provincias.
- 12) Otorgamiento de una amnistía especial a los rebeldes musulmanes.
- 13) Creación y organización del programa SALAM (asistencia especial para la alfabetización y el adelanto de los musulmanes). Enseñanza del idioma árabe en las escuelas públicas de las zonas musulmanas.
- 14) Creación y organización del programa SPARE (programa especial para la asistencia y rehabilitación de los evacuados) en Mindanao y Sulu.
- 15) Aumento de los créditos y ampliación de las instalaciones de la Universidad del Estado de Mindanao, a fin de dar cabida a más musulmanes de las zonas de Mindanao y Sulu.

/...

- 16) Establecimiento de la aldea Maharlika (musulmana), en la zona de la Gran Manila, en una parte de la reserva militar.
- 17) Creación del cargo de Oficial de Desarrollo para las Minorías Culturales en las provincias en que hay un número importante de familias pertenecientes a tales minorías; el cargo será desempeñado por el miembro más calificado de las minorías culturales.
- 18) Establecimiento y funcionamiento del proyecto CELL, un sistema cooperativo de préstamos con arreglo al cual un grupo de diez personas garantizará los préstamos que el banco haga a cada uno de ellos.
- 19) Creación y organización de la Oficina de Asuntos Musulmanes en la Policía de Filipinas, encabezada por un alto oficial musulmán de la misma.
- 20) Supervisión, estímulo y facilidades gubernamentales para el peregrinaje de los musulmanes filipinos a La Meca en 1974, eliminación de la documentación y las restricciones normales de viaje, y coordinación con el Gobierno de Arabia Saudita.
- 21) Creación de tres nuevas provincias en Mindanao - Cotabato Septentrional, Maguindanao y Sultan Kudarat - y otras dos en Sulu - Sulu y Tawi-Tawi -, que son zonas habitadas predominantemente por minorías culturales nacionales."

ISRAEL

/Original: inglés/

/27 de febrero de 1974/

En el período que se examina, el Estado de Israel continuó aplicando su proclamada política de reconocimiento y realización de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes, de conformidad con los principios enunciados cuando se creó el Estado en 1948. Durante dos decenios y más, esa política se ha venido aplicando y elaborando progresivamente y no ha habido necesidad de desviaciones ni modificaciones. El espíritu de los instrumentos internacionales en esta esfera de los derechos humanos informa el derecho y la práctica de Israel.

Los siguientes acontecimientos son los más importantes que se han producido en los cuatro últimos años.

A. El derecho al trabajo1. Derecho a la libre elección del trabajo

En el caso Kenig contra Histadrut Kupat Holim (1969) 23 P.D. (I) 627, la solicitante pedía un fallo declarativo con el propósito de anular su despido del empleo, motivado por su negativa a trasladarse a un puesto en el que, según afirmaba, tendría que trabajar completamente sola, apartada de los demás empleados. La Corte Suprema sostuvo que, con sujeción a limitaciones legales, un empleador podía despedir a un empleado; pero si ese despido era injustificado, este último tenía el recurso, no de solicitar una declaración para su reposición en el cargo, sino de demandar una indemnización por despido injustificado.

6. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, etc.

En el caso El Al contra El Al (1969) 23 P.D. (II) 305, un padre apelaba contra una adjudicación de manutención para su hijo pequeño, alegando que esa adjudicación era excesiva y que requeriría que trabajase horas extraordinarias u obtuviese empleo adicional de jornada parcial. Kister J. observó (en la pág. 317): "Una de las conquistas de nuestros tiempos es que el trabajador tenga derecho a horas de descanso, a días de descanso y a feriados, y que no se le exija trabajar horas diarias o semanales que excedan el máximo establecido por el derecho nacional".

8. Derecho de huelga

La Ley sobre el Arreglo de Litigios Laborales de 1957 fue modificada en 1969 a fin de facilitar los procedimientos de conciliación. Según la Ley, una parte en un litigio laboral debe notificar a la otra parte y al Jefe de Relaciones Laborales de toda huelga propuesta por lo menos 15 días antes de su iniciación. Sin embargo, si se ha convenido un procedimiento distinto en un contrato colectivo entre empleadores y empleados, se aplicarán las disposiciones del contrato. Además, el

/...

Ministro de Trabajo podrá, con la aprobación del Comité de Asuntos Laborales de la Knesset (Parlamento), designar mediante reglamentos las clases de litigios o de empleo a las cuales no se aplicará el nuevo procedimiento. En 1972 se enmendó nuevamente la Ley citada con el propósito de limitar el derecho de huelga en determinadas ocupaciones vitales, tales como el gobierno central y local, la salud pública, el sistema de enseñanza obligatoria y el transporte aéreo. No se protegerá ninguna huelga (o cierre patronal) en ninguna de esas ocupaciones cuando exista o haya existido un contrato colectivo y la huelga no sea debidamente aprobada por la organización de empleados competentes o no se haya hecho la notificación correspondiente con arreglo a la Ley. Una huelga comprende cualquier cesación del trabajo, total o parcial, incluida la huelga de trabajo lento o cualquier otra modificación de los procedimientos normales de trabajo, así como la negativa organizada a trabajar en horas extraordinarias lícitas cuando la obligación de hacerlo figura en el contrato colectivo. Una huelga no protegida escapa a las disposiciones de protección de la ley sobre hechos ilícitos, con la excepción de que a la organización de empleados como tal no incumbirá ninguna responsabilidad. Si las partes en un litigio laboral de esa índole no convienen en el modo de resolverlo dentro del plazo de seis semanas, el litigio debe someterse a arbitraje y concluir en el plazo de un mes. Para estos fines, el Estado recibe el mismo trato que cualquier otro empleador.

En el caso Shavit contra Hanan y otros (1969) 23 P.D. (I) 516, una huelga de trabajadores cinematográficos terminó con un acuerdo entre el consejo local de trabajadores y los propietarios del cine en el sentido de permitir que las condiciones de empleo de algunos trabajadores de la construcción empleados en la construcción de un cine se sometieran a arbitraje. Después de iniciado el procedimiento de arbitraje, los propietarios del cine lo denunciaron como ilegal, alegando principalmente que el consejo de trabajadores se había injerido en una cuestión que no era de su competencia y había iniciado ilícitamente la huelga con las graves pérdidas consiguientes para los apelantes. En su mayoría, los trabajadores cinematográficos de la zona, no estaban afiliados al consejo ni le habían pedido que los representara. Al rechazar la apelación, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que aún en el caso de que el objetivo real del consejo fuera lograr que los trabajadores se pusiesen bajo su égida y disuadirlos de que se afiliaran a otros sindicatos, se había planteado un litigio laboral. La esencia de las negociaciones colectivas era la confrontación de fuerzas opuestas y tales negociaciones culminaban en una solución mediante la huelga o el cierre patronal o mediante la transacción. El uso de la huelga para lograr el reconocimiento del principio de la mano de obra organizada, convenir condiciones de empleo y asegurar los derechos de los empleados, era totalmente legítimo en las circunstancias sociales y económicas actuales.

El caso Finstein y otros contra la Asociación de Profesores de Escuelas Secundarias (1971) 25 P.D. (I) 129, fue una apelación presentada por los propietarios de un colegio privado y los padres de los alumnos contra la negativa de un tribunal inferior de expedir una orden judicial contra los maestros que se habían declarado en huelga en un litigio con los propietarios, pero que no la habían notificado con los 15 días de anticipación previstos en la ley. En realidad, la huelga se había iniciado después de haber transcurrido ese plazo. Los padres se basaron en la sección 62 de la Ordenanza sobre Hechos Ilícitos Civiles, que califica

de hecho ilícito civil el hacer, a sabiendas y sin justificación, que una persona viole un contrato jurídicamente válido, en la inteligencia de que una huelga no será considerada como tal violación de contrato. Los padres alegaron que la disposición se aplicaba sólo a los contratos laborales. El Tribunal, por conducto de Cohn J., declaró:

"Es de conocimiento general que corresponde a la naturaleza de las huelgas ... originar la transgresión de muchos contratos de amplísima variedad; y si los instigadores de una huelga ... fueran responsables de las pérdidas que resulten de esas transgresiones, ello pondría fin a las huelgas y las haría imposibles. Cabe afirmar que nada está más lejos del espíritu de la legislación de Israel que el deseo de poner término a las huelgas. Si en una reciente decisión un juez inglés calificó de "vaca sagrada" a las huelgas, entre nosotros deben considerarse por lo menos como un tipo de tradición santificada que ya no se puede impugnar. La sección 62 no debe interpretarse en el sentido de excluir sólo la transgresión de los contratos laborales ... la interpretación adecuada que debe dársele es que cualquiera sea el contrato del que una huelga ... origina la transgresión, dicha huelga ... no puede servir como causa de una demanda en virtud de la sección."

El argumento de los propietarios, basado en la sección 63, que trata del incumplimiento de obligaciones legales, también fue rechazado por el Tribunal.

"En realidad, una huelga es sólo un medio, siquiera el más drástico, para mejorar las condiciones de empleo, y como tal, afecta directamente las condiciones de la contratación de los empleados. Para los fines de la Ley sobre el Arreglo de Litigios Laborales, ... la huelga se produjo efectivamente después de haber expirado el plazo establecido por la Ley y, por consiguiente, el apelante no sufrió daños, ... siendo los daños uno de los elementos del hecho ilícito civil, según la sección 63."

- B. El derecho a la seguridad social, incluso al seguro social en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad

La Ley de Seguro Social (Versión unificada), 1968, ha sido objeto de varias enmiendas importantes. Por cierto, la Ley de Seguro Nacional (Enmienda No. 2), 1969, además de introducir diversos cambios y aumentos de las escalas de tasas y edades, incorpora todo un capítulo nuevo que se ocupa de la formación profesional de las viudas y los huérfanos que consagran su tiempo principalmente a estudios posprimarios o formación profesional.

Además, la Ley de Seguro Nacional (Enmienda No. 10), 1973, es una enmienda detallada y de fondo, que aclara las definiciones y los requisitos de los titulares de las prestaciones y amplía las prestaciones concedidas, entre ellas las pensiones para los ancianos y sobrevivientes, las pensiones por lesión en el empleo o invalidez, las pensiones para personas a cargo y los subsidios de maternidad,

desempleo y readiestramiento. Además, un nuevo capítulo dispone el pago de gratificaciones a una persona si su reclamación dentro de la estructura de las distintas clases de seguro no le da derecho a una prestación en determinadas condiciones especificadas.

El seguro de desempleo se ha introducido ahora como parte del Plan de Seguro Nacional para abarcar a todos los empleados de entre 18 y 65 años de edad (60 para las mujeres) y respecto de los cuales se exige que el empleador aporte contribuciones al Seguro Nacional. Una persona tiene derecho a prestaciones de desempleo siempre que se hayan pagado respecto de él contribuciones al seguro de desempleo durante 180 días (150 días en el caso de los jornaleros) en el año anterior o durante 270 (225) días en los 18 meses anteriores. Se considera que una persona está desocupada si está registrada en una Bolsa de Trabajo como sin trabajo y deseosa y en condiciones de trabajar en su profesión o en cualquier otra ocupación adecuada, y la Bolsa de Trabajo no le haya ofrecido trabajo. La expresión "otra ocupación adecuada" se define como cualquier trabajo del tipo que la persona ha realizado principalmente durante los tres años anteriores o que de otro modo corresponda a su formación, su nivel de educación y su salud, con la condición de que los salarios propuestos no sean inferiores a lo que recibiría a título de prestaciones de desempleo y el trabajo no exija un cambio de residencia. El trabajador que abandona su empleo voluntariamente y sin justificación no tiene derecho a ningún pago durante el primer mes; lo mismo se aplica a cualquiera que rehuse un empleo que le ofrezca la Bolsa de Trabajo. La prestación de desempleo se calcula diariamente como porcentaje del salario nacional medio. Se paga un subsidio especial por hijo respecto de los dos primeros hijos. El plazo máximo durante el cual se recibe la prestación de desempleo es aproximadamente de 175 días por año para que una persona mayor de 45 años o con tres hijos a cargo y, en cualquier otro caso, de 138 días; los cinco primeros días de cualquier período de 129 días continuos se consideran como período de espera y no se hace ningún pago respecto de ellos. Un menor de entre 15 y 18 años de edad que contribuya al sostén de sus padres o hermanos y hermanas y para quien la Bolsa de Trabajo no pueda encontrar empleo tiene derecho a un subsidio especial de desempleo.

Los derechos a la seguridad social de los funcionarios públicos, incluidos los maestros de jardines de infantes y los de policías y guardias de prisiones, se rigen actualmente por la Ley de Administración Pública (Prestaciones) (Versión unificada), 1970, que comprende sueldos, jubilaciones y gratificaciones, pensiones de sobrevivientes, el pago de ciertas gratificaciones a las viudas y el pago por separación del servicio. Un capítulo relativo a las reclamaciones y pagos establece en detalle el método para la tramitación y el pago respecto de quienes tienen derecho a las diversas prestaciones. Además, hay disposiciones relativas a los empleados que ingresan al servicio o se retiran de él y detalles referentes a restricciones por motivos de salud, edad o invalidez.

Los soldados licenciados y sus familias son objeto de atención especial en la Ley relativa a los Soldados Licenciados (Reposición en el Empleo) (Enmienda No. 4), 1970, que dispone que el Ministro de Trabajo, en consulta con el Ministro de Finanzas y con la aprobación del Comité de Finanzas de la Knesset, podrá dictar reglamentos

destinados a conceder subsidios a los soldados o a los miembros de sus familias, teniendo en cuenta su situación económica y familiar. El término "soldado" comprende, además de quienes prestan o han prestado servicio militar, a los miembros de la policía o del servicio de prisiones.

De modo análogo, la Ley sobre Víctimas de Acciones Hostiles (Pensiones), 1970, se ocupa de una categoría de casos que lamentablemente no son raros en Israel. Se pagan pensiones a las personas lesionadas o a los miembros de las familias de personas que han muerto a consecuencia de lesiones ocasionadas por acciones hostiles por parte de fuerzas militares, semimilitares o irregulares de un Estado hostil a Israel, por acciones hostiles de una organización hostil a Israel o por acciones hostiles realizadas en apoyo de cualquiera de esas organizaciones, siguiendo sus instrucciones o para cumplir sus objetivos. Entre los beneficiarios se incluyen las personas que han entrado al país con una visa o un permiso. Además de las prestaciones en dinero, se les ofrece atención médica y de convalecencia y rehabilitación, así como préstamos para vivienda. Una enmienda a la ley, dictada en 1973, establece el pago de gratificaciones para gastos funerarios y de un subsidio anual de descanso y recreación para un padre, una madre o una viuda. En determinadas condiciones, las disposiciones de la Ley pueden ampliarse a fin de que cubran a una persona no residente que haya sufrido lesiones infligidas por el enemigo en el exterior, durante su empleo al servicio de un residente de Israel o a consecuencia del mismo.

La Ley relativa a las Familias de los Soldados Caídos (Pensiones y Rehabilitación), (Enmienda No. 7), 1971, dispone que cuando una viuda, que no tenga hijos que vivan de sus propios medios, necesita cuidados en una institución por su edad avanzada o por su salud, el funcionario encargado de las pensiones puede pagar directamente a esa institución los gastos de su manutención y asistencia médica, así como de los equipos y artefactos médicos que se precisen. En caso necesario, el pago podrá exceder el monto de la pensión. Una disposición posterior de la Ley (Enmienda No. 8), 1973, permite también el pago anual de un subsidio de descanso y recreación para un padre, madre, viuda que no tenga derecho a tal subsidio en su lugar de empleo.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

4. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

La Ley de Impuestos Paralelos, 1973, dispone el pago por los empleadores de aportaciones a los fondos de enfermedad de los empleados, paralelas a las aportaciones pagadas por los propios empleados. En realidad, el impuesto se paga al Instituto Nacional de Seguros que luego distribuye el total pagado cada año a los diversos fondos de enfermedad que existen. Los fondos de enfermedad deben proporcionar servicios médicos en el trabajo, adoptar medidas de prevención y realizar investigaciones de acuerdo con los reglamentos dictados por el Ministro de Salud. El hecho de que el empleador no pague el impuesto paralelo no perjudica a los empleados. El Estado recibe el mismo trato que cualquier otro empleador.

2. El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente

La Ley Reglamentaria sobre Salud Pública (Enmienda No. 4), 1970, autoriza al Ministro de Salud a reglamentar la calidad sanitaria (biológica, física, química, radiactiva y organoléptica) del agua potable, incluida el agua destinada a la cocción de alimentos o a la utilización en la industria de alimentos. También puede prescribir condiciones sanitarias para los recursos hídricos utilizados para esos fines, así como para la planificación y el funcionamiento de los sistemas de agua potable. Nadie puede suministrar agua potable que no sea de la calidad sanitaria prescrita, ni puede mantener instalaciones de agua potable que no se ajusten a los reglamentos relativos a las normas sanitarias. Se conceden facultades para el ingreso, la inspección, la realización de exámenes y pruebas, así como para declarar que el agua no es adecuada a los fines de la Ley. Se dispone de las sanciones habituales.

E. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

1. Derecho de la familia a protección y asistencia

Además de los ajustes periódicos de las tasas de los subsidios familiares que se pagan en virtud del Seguro Nacional a la luz de las variaciones del índice del costo de la vida, se prevén subsidios especiales o aumentos mediante leyes de enmienda de la Ley de Seguro Nacional, 1968 (Versión unificada) para familias que comprendan tres o más niños. Una Ley de enmienda de 1960 establece también que cuando un niño tiene un padre (o madre) natural y otro (u otra) y ambos están asegurados, se considerará que el niño está a cargo del padre (o madre) con quien vive.

2. Derecho de las madres a cuidados y asistencia especiales

Un problema que ha ocasionado dificultades se relaciona con la situación de una madre que ha obtenido sentencia favorable de prestación de alimentos para sí y sus hijos contra el marido que la ha abandonado, pero que no puede obtener la ejecución efectiva de esa sentencia. Para aliviar la situación creada, la Ley de Manutención (Seguridad de pago), 1972, dispone que toda persona que haya obtenido una sentencia de manutención tiene derecho a reclamar del Instituto Nacional de Seguros el pago mensual de la cantidad fijada, hasta un máximo también establecido, en vez de iniciar y proseguir una acción para obtener la ejecución. El Instituto queda subrogado en los derechos del reclamante. El derecho al pago por el Instituto subsiste durante el plazo fijado en la sentencia y todas las modificaciones posteriores de la orden judicial deben reflejarse en los pagos efectuados. Las disposiciones de la Ley se aplican igualmente a toda diferencia entre la cantidad que la demandante consigue obtener directamente en la ejecución de la sentencia y la cantidad a que tiene derecho según esa sentencia.

3. Derecho de los niños y los jóvenes a cuidados y asistencia especiales

La Ley Reglamentaria del Código Penal (Enmienda No. 32), 1971, califica de delito el hecho de que una persona ofrezca o pague a otra una retribución por el derecho de obtener la custodia de un niño menor de 14 años, independientemente de si esa retribución sea en dinero o en especie. El padre o apoderado también es responsable si permite la entrega del niño, tratando con ello de repudiar sus obligaciones o derechos respecto del niño. Se admite como defensa la circunstancia de que la entrega se haya realizado como parte de los procedimientos de adopción o se haya efectuado por un plazo limitado y con la autorización del funcionario encargado del bienestar social, o de que la persona a quien se haya entregado el niño sea un pariente cercano y la entrega haya sido en beneficio del niño.

En el caso Pérez contra Pérez (1972), 26 P.D. (II) 793, el apelante impugnó una decisión en virtud de la cual, como padre natural del niño, se le obligaba a prestarle alimentos. Como el niño había nacido fuera de matrimonio en Marruecos, el apelante planteó la cuestión de si según el derecho marroquí se había creado alguna relación jurídica entre ambos, por la que el padre tuviera la obligación de prestar manutención al niño, y alegó que ese aspecto no se había tratado en primera instancia. La Corte Suprema rechazó la apelación y afirmó en la sentencia (por conducto de Berinson J.) que "actualmente no se puede considerar la posibilidad de que el derecho de ningún Estado desconozca la obligación de un padre de mantener a su hijo pequeño. Y si en realidad existe un Estado que lo haga, esta Corte no está obligada a observar su legislación. De proceder así, esta Corte estaría ofendiendo todo sentimiento humano y moral".

F. El derecho a la educación

1. Derecho a la enseñanza primaria gratuita

La Ley de Enseñanza Obligatoria (Enmienda No. 5), 1969, extiende la enseñanza obligatoria a los niños y adolescentes desde los 5 hasta los 15 años, suministrando así enseñanza desde el jardín de infantes hasta el décimo grado. La aplicación total del plan se completará dentro de algunos años.

En determinadas condiciones establecidas por los reglamentos dictados por el Ministro de Educación, en consulta con el Ministro de Trabajo y con la aprobación del Comité de Educación y Cultura de la Knesset, el aprendizaje de un adolescente de 15 años de edad se considera enseñanza obligatoria dentro del significado que le da la Ley. Para ese fin, se establecerá un programa obligatorio de estudios teóricos para el aprendizaje.

El período de enseñanza obligatoria debe ser libre. Además, para el caso de una persona de 16 ó 17 años de edad que no ha completado el décimo grado, existen disposiciones que autorizan a la Tesorería a pagar sus derechos de enseñanza hasta que termine ese grado.

2. Derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad o el mérito, incluso la enseñanza técnica, vocacional y profesional

Los derechos e intereses de los jóvenes se han reafirmado mediante la adición de un nuevo capítulo a la Ley sobre el Trabajo de los Jóvenes, 1953, que se ocupa de los períodos obligatorios de estudio para los jóvenes de 15 a 18 años de edad, que trabajan, a fin de capacitarlos mejor para la profesión que han elegido; Enmienda a la Ley sobre el Trabajo de los Jóvenes (Enmienda No. 6), 1972.

Se prevé la aplicación gradual de las disposiciones, con un límite máximo de cinco años. Se dará al plan un grado considerable de flexibilidad en cuanto al número de horas semanales de asistencia y a la distribución geográfica y ocupacional de los cursos que han de ofrecerse. La capacitación prevista será libre, con excepción del costo del equipo personal y de los materiales necesarios para el curso. Correlativamente, los empleadores tienen la obligación de dar a las personas tiempo libre para ese propósito y no podrán hacer deducción alguna de sus sueldos por su ausencia del trabajo para asistir a las clases.

3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos

La Ley de Enseñanza Obligatoria (Enmienda No. 5), 1969, dispone la protección continua del derecho a elegir entre la educación pública y la educación pública religiosa. Esa ley modifica también la Ley sobre el Trabajo de los Jóvenes, disponiendo que un niño que no haya llegado aún a la edad de 15 años no será empleado sino como aprendiz, o durante un feriado escolar oficial o cuando se tenga constancia de que ha completado su educación obligatoria o existan razones especiales a juicio del Ministro de Educación.

Las recientes reformas en el sistema educacional de Israel, especialmente la elevación de la edad de transición de la etapa primaria a la secundaria, han requerido el traslado de los niños de una escuela a otra. En el caso Kramer y otros contra la Municipalidad de Jerusalén y otros, (1971) 25 P.D. (I) 767, varios padres objetaron el traslado de sus niños de la escuela privada autorizada a la que asistían a una escuela pública no muy distante, alegando que era un derecho fundamental de los padres elegir cómo y dónde habrían de educarse sus hijos. Toda disposición que limitase ese derecho era ilícita y no se podía imponer ningún traslado simplemente por las exigencias de una reforma del sistema que no se había sancionado expresamente por ley sino que se había incorporado administrativamente. El Tribunal rechazó la petición. Señaló que según la Ley de Educación Pública, 1953, los padres tenían derecho a elegir la escuela para sus hijos en el momento en que se matriculaban por primera vez con arreglo a las disposiciones de la enseñanza obligatoria. Una vez hecho eso, quedaban sujetos a los reglamentos relativos a traslados y su derecho quedaba limitado en esa medida. El Estado no sólo se interesaba en la creación y conservación de escuelas, sino que también supervisaba el tipo y la calidad de la enseñanza ofrecida durante el período de enseñanza obligatoria. La elección de las escuelas por los padres no podía ser absolutamente

libre y debía someterse a los reglamentos dictados a ese respecto, puesto que permitir que los padres trasladasen libremente a sus hijos crearía graves dificultades para todo el sistema educacional - en cuanto a la ubicación, el tamaño de las clases y otros aspectos - que no se justificarían. Además de las consideraciones estrictamente educacionales, tal libertad no controlada podría menoscabar los derechos de otros padres. El interés privado debía conciliarse razonablemente con el bien público y no era excepcional que, por motivos relacionados con la política social y educacional, el Gobierno limitase el derecho de los padres a proceder libremente. Las actuales reformas educacionales eran resultado de arduas y prolongadas deliberaciones y se habían desplegado muchos esfuerzos en todas las ramas de la administración, incluido un comité parlamentario, para dar forma y fondo adecuados al nuevo sistema. El Ministro de Educación estaba plenamente autorizado por la ley a dictar reglamentos sobre procedimientos ordenados para el traslado de los niños. Esos reglamentos no podían ser impugnados mientras fuesen congruentes con el uso al que estaban destinados y ese uso no condujese a ninguna frustración del propósito para el cual el Poder Legislativo había conferido la facultad de dictarlos. En ese aspecto, los reglamentos se vinculaban a la esencia misma del nuevo sistema y eran una condición indispensable para su aplicación plena y eficaz. La facultad conferida a las autoridades competentes para los traslados podía ejercerse no sólo respecto de los traslados de una escuela pública a otra sino también de los traslados de una escuela pública a una escuela privada autorizada, y viceversa.

KUWAIT

[Original: inglés]

[20 de marzo de 1974]

El derecho al trabajo

Kuwait ratificó el Convenio No. 111 de la OIT, del año 1958, cuyo fin es evitar la discriminación en el empleo.

Kuwait ratificó los Convenios No. 29 y 105 de la OIT relativos a la abolición del trabajo forzoso.

En Kuwait los trabajadores inmigrantes y todos los trabajadores procedentes del extranjero gozan de todos los derechos que establece la legislación laboral interna.

La legislación interna de Kuwait otorga a las mujeres los mismos derechos que a los hombres en materia de trabajo y emolumentos.

Kuwait ratificó el Convenio No. 87 de la OIT relativo a la protección del derecho de sindicación y el Convenio No. 117 de la OIT relativo a las normas y objetivos básicos de la política social.

El Representante Permanente adjunta también una nota en árabe relativa a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad, preparada por la Junta de Planificación de Kuwait.

/...

/Original: árabe/

ESTADO DE KUWAIT

Junta de PlanificaciónDepartamento de Planificación SocialPolíticas generales de desarrollo económico y social
que han contribuido a asegurar el reconocimiento, la
efectividad y la protección de los derechos económicos,
sociales y culturales en la sociedad

En este contexto, la expresión "políticas generales" se refiere a las políticas que son aplicables a la sociedad en general y que no se relacionan concretamente con ningún tipo determinado de actividades sociales o económicas. La política económica del Estado queda incluida bajo el epígrafe de políticas generales que establecen los principios y objetivos que regulan la actividad económica y las relaciones existentes en el país dentro del marco de esa política. La política social relativa a las comunidades y a las relaciones existentes entre las comunidades y grupos que forman parte de la sociedad queda incluida bajo el epígrafe de políticas generales que establecen los principios y objetivos que regulan la actividad social en un país.

En el primer plan quinquenal para el desarrollo económico y social se estableció el marco general para las políticas económicas y sociales. Los principales lineamientos y principios de la política económica general se refieren a los aspectos relacionados con el desarrollo económico, la especificación del ámbito de actividad productiva, tanto en el sector público como en el privado, y el aumento del alcance del sector mixto. El objetivo de la política social es el progreso social en todos sus tipos y formas. Los objetivos de las políticas económicas y sociales incluyen la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los miembros de la sociedad.

Además, la Constitución establece estos derechos, que constituyen el objeto del título III, "Derechos y deberes de los ciudadanos".

Estos derechos pueden clasificarse de la siguiente manera:

1. Derechos del individuo;
2. Derechos de la familia;
3. Derechos políticos y libertades públicas;
4. Derechos sociales y económicos.

No puede decirse que las Naciones Unidas hayan ejercido una influencia directa en cuanto al establecimiento de esas políticas, si bien las políticas y los principios que involucran fueron establecidas en cumplimiento de las declaraciones de las Naciones Unidas, inclusive la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social.

El objetivo fundamental de nuestras políticas económicas y sociales es establecer una sociedad de bienestar en la cual todo individuo goce de un nivel adecuado de ingresos reales proporcionado al esfuerzo que realice y, al mismo tiempo, se beneficie con los numerosos servicios suministrados por el Estado en materias como la sanidad y la enseñanza y como los diversos servicios públicos. Es axiomático que en una sociedad de bienestar todos deben sentirse seguros respecto de su presente y su futuro, y que la sociedad garantice un ingreso mínimo a toda persona que pierda sus medios de ganarse la vida por incapacidad, impedimento físico, enfermedad crónica, vejez o cualquier otro accidente que pueda ocurrir a un individuo durante su vida. En otras palabras, la meta de una sociedad de bienestar es terminar definitivamente con la necesidad en todos sus aspectos, liberar a los miembros de la sociedad de su dominación sobre ellos y evitar que caigan en sus garras a fin de darles la posibilidad de vivir una vida plena y que todos puedan emprender el camino de la productividad y de la actividad útil, de manera de cumplir la función que les cabe en el afianzamiento y consolidación de las bases de la sociedad.

Los acontecimientos de importancia en relación con el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, en disposiciones constitucionales, medidas legislativas y reglamentos y procedimientos administrativos promulgados y en los fallos dictados por los tribunales se tratan de acuerdo con el sistema de categorización establecido en la parte III del esquema de los epígrafes propuesto por las Naciones Unidas.

A. El derecho al trabajo y el derecho a la libre elección del trabajo

1. Derecho al trabajo: El artículo 41 de la Constitución del Estado de Kuwait dispone lo siguiente:

"Todo kuwaití tiene derecho a trabajar y elegir la clase de trabajo."

No cabe duda de que esta disposición se cumple plenamente.

2. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias:

El artículo 40 de la Ley relativa al trabajo en el sector privado (No. 38 de 1964) dispone:

"Los empleadores proveerán los medios adecuados para proteger a los trabajadores de los accidentes que pueden ocurrir durante su trabajo, a causa del uso de equipos mecánicos, engranajes desplazables, maquinarias elevadoras y de transporte y toda otra posible fuente de riesgos."

El artículo 43 dispone:

"Los empleadores adoptarán las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores de las enfermedades profesionales en aquellas industrias y ocupaciones respecto de las cuales el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo emitirá una declaración. Dicho Ministerio organizará y regulará los medios de protección requeridos para cada industria."

/...

El artículo 46 dispone:

"Los empleadores de trabajadores que desempeñen tareas en lugares alejados de los centros de población suministrarán a éstos alojamiento adecuado, agua potable y servicios de comedor, según se establezca por acuerdo entre las dos partes. El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo determinará las zonas en que se aplicarán las disposiciones del presente artículo."

3. Derecho a la protección contra el desempleo y el empleo insuficiente .

El artículo 8 de la Ley antedicha dispone:

"Los trabajadores desempleados tendrán derecho a registrarse en el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo o en cualquiera de sus dependencias dentro de cuya zona residan."

El Ministerio procura colocarlos en puestos adecuados a su edad y competencia técnica.

4. Derecho de toda persona que trabaja a una remuneración equitativa y satisfactoria:

El artículo 54 de la Ley relativa al trabajo en el sector privado (No. 38 de 1964) determina la suma a que tiene derecho un trabajador por concepto de remuneración al dejar de prestar servicios a un empleador, sin considerar si su contrato es o no de plazo fijo. La remuneración del trabajador se computa desde la fecha en que se hace cargo de su puesto.

5. Derecho de toda persona a igual salario por trabajo igual:

Este axioma no se aplica en la práctica, si bien el artículo 29 de la Constitución establece efectivamente esa igualdad.

6. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas:

En virtud de las disposiciones de la Constitución y de las leyes del trabajo vigentes en el Estado de Kuwait, tanto respecto del sector privado como del oficial, los trabajadores gozan del derecho al descanso y a la limitación de la jornada de trabajo (6 horas por día), así como a vacaciones periódicas pagadas.

7. Derecho a fundar sindicatos:

La Constitución establece el derecho a fundar sindicatos.

8. Derecho de huelga:

Todo ciudadano tiene el derecho de expresar su opinión dentro de los límites que establecen las leyes y reglamentos vigentes.

/...

B. El derecho a la seguridad social: (desde 1954 ha existido la categoría de beneficiarios indigentes)

Si bien la Constitución (artículo 11) y las leyes que rigen el trabajo en los sectores privado y público contienen disposiciones relacionadas con la seguridad social, está aún en estudio una ley especial sobre la materia, y todavía no se ha dictado ninguna medida especial de ese tipo. El artículo 11 de la Constitución dispone:

"El Estado prestará ayuda a los ciudadanos ancianos, enfermos o incapacitados para el trabajo. Les facilitará asimismo los servicios de seguridad, asistencia social y asistencia médica."

C. El derecho a un nivel de vida adecuado

1. Derecho a una alimentación adecuada:

Los ciudadanos tienen el derecho a obtener una alimentación adecuada.

2. Derecho a vestido y vivienda adecuados:

También este derecho está garantizado. El Gobierno, indudablemente, se ha preocupado mucho del bienestar de los ciudadanos, y ha elaborado un proyecto para la construcción de viviendas baratas destinadas a quienes carecen de ella, que han de pagarse mediante cuotas mensuales reducidas y con la ayuda de préstamos a largo plazo. El Banco de Crédito y Ahorro otorga créditos y todo tipo de facilidades para asegurar que todos los ciudadanos de Kuwait tengan vivienda y cubran las demás necesidades básicas de ese tipo. Los planes antedichos incluyen también las cuestiones relativas al suministro de los servicios sociales necesarios y a la seguridad de condiciones ambientales adecuadas.

D. Atención sanitaria

En Kuwait el cuidado de la salud está garantizado mediante un sistema de seguro sanitario y a través de las actuales campañas de información cuyo objetivo es que los ciudadanos estén enterados de los peligros de las enfermedades que pueden contraerse a causa de factores exógenos. Cabe señalar aquí que la atención sanitaria está garantizada para los ciudadanos y los no ciudadanos en forma gratuita, en cumplimiento del artículo 15 de la Constitución, que dice:

"El Estado velará por la salud pública; procurará tratar las enfermedades y epidemias, y prevenirlas con medios adecuados."

E. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

1. Derecho de la familia a protección y asistencia:

El artículo 9 de la Constitución dispone que:

"La familia es la piedra angular de la sociedad. Sus fundamentos son la religión, la moralidad y el patriotismo. La ley protegerá la integridad de la familia, reforzará sus lazos y defenderá a la madre y al niño."

En cumplimiento de esta disposición constitucional y del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social", el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, reconociendo que sus responsabilidades respecto de la atención social para la familia comienzan antes del nacimiento del niño, ha procurado asegurar a la familia las condiciones saludables que sean propicias para la llegada del hijo con medidas de atención para las mujeres embarazadas y las madres lactantes, de conformidad con las disposiciones de la Ley de asistencia pública, No. 19 de 1962 (enmendada por la Ley No. 5 de 1968, enmendada a su vez, en 1971). En consecuencia, el Ministerio asegura al niño una atmósfera adecuada a su formación durante el crecimiento y el desarrollo mediante un sistema de jardines de infantes cuyo objetivo es proporcionar recreación a los niños y asegurarles una atmósfera adecuada en la que puedan pasar su tiempo libre en actividades colectivas bajo la supervisión de trabajadores sociales especializados, lo que contribuye a desarrollar su personalidad y a crear en ellos un espíritu de cooperación y afecto.

Por cuanto ésta es responsabilidad del Estado o la sociedad para con aquellos niños a quienes Dios Todopoderoso bendijo con la protección de una sólida vida familiar, es natural que sean mayores aún los esfuerzos desplegados en el caso de los niños huérfanos y expósitos, quienes están privados de todos esos beneficios.

Por esta razón, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo emprendió en 1961 la tarea de establecer una Fundación de Hogares para la Infancia.

F. El derecho a la educación

El artículo 13 de la Constitución dice:

"La educación es una condición fundamental para el progreso de la sociedad, y el Estado la extenderá y hará llegar a todos."

El artículo 14 de la Constitución dice:

"El Estado velará por el desarrollo de la ciencia, las letras y las artes, y fomentará la investigación científica."

El artículo 40 de la Constitución dice:

"Los ciudadanos de Kuwait tienen derecho a la educación; ésta quedará asegurada por el Estado dentro del marco de las leyes y de los límites de la seguridad y moralidad públicas. La educación primaria será obligatoria y gratuita con arreglo a la ley.

"La ley señalará el programa correspondiente para eliminar el analfabetismo.

"El Estado dispensará especial cuidado al desarrollo físico, moral e intelectual de la juventud."

En cumplimiento de las disposiciones de la Constitución y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación ha puesto la instrucción técnica y profesional al alcance de todos, y ha establecido una escuela normal para varones, otra para mujeres, una escuela secundaria comercial y un instituto industrial de nivel universitario. Procura que la educación sea accesible para todos los ciudadanos, y ha creado institutos especiales para ciegos, sordos, mudos, retardados mentales e inválidos de ambos sexos. Además, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo ha cooperado para que la educación sea accesible a todos los adultos mediante el establecimiento de centros nocturnos donde se imparte enseñanza básica a personas de ambos sexos. El Ministerio también ha adoptado disposiciones a fin de que los estudiantes calificados que hayan completado sus estudios secundarios - académicos o industriales - puedan ingresar en la enseñanza superior. Ha otorgado el derecho de asistir a las universidades y a los institutos de educación superior con cargo al Ministerio - 70% de todos los estudiantes de sexo masculino que han obtenido un certificado general de estudios secundarios en las artes, 80% de todos los candidatos de sexo masculino que han completado con éxito sus estudios en las ciencias, y a todas las candidatas, tanto en el campo de las artes como de las ciencias. La Universidad de Kuwait fue creada recientemente y comprende cuatro facultades, a saber: la Facultad de Ciencias, la Facultad de Artes, la Facultad de Sharia y Derecho y la Facultad de Comercio, Economía y Ciencias Políticas. La matrícula anual incluye un número apreciable de estudiantes kuwaitíes y no kuwaitíes de ambos sexos.

3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos:

Sin lugar a dudas, los padres gozan en el Estado de Kuwait del derecho a escoger el tipo de educación y especialización que desean para sus hijos.

G. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural

1. El artículo 36 de la Constitución dispone:

"Quedan aseguradas la libertad de opinión y de investigación científica. Cualquier persona tiene derecho a expresar y difundir sus ideas verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio, en las condiciones y por los procedimientos previstos por la ley."

El artículo 37 de la Constitución dispone:

"La libertad de prensa, de imprenta y de publicación queda asegurada en las condiciones y formas previstas por la ley."

Todo lo anterior se relaciona con el aspecto constitucional. En cuanto al aspecto práctico, puede afirmarse que los ciudadanos de Kuwait gozan en la práctica de este derecho, dentro de los límites que fija la ley.

2. El derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas está garantizado por la Constitución y asegurado en la práctica.

IV

El artículo 29 de la Constitución, que se relaciona con la cuestión de la plena igualdad, dispone:

"Todos los hombres son iguales tanto en dignidad como en sus derechos y deberes respecto a la ley, sin distinción de raza, origen, lengua o religión."

Algunas de las dificultades con que se ha tropezado para asegurar el goce del derecho antedicho pueden atribuirse al permanente aumento en el ingreso de inmigrantes extranjeros al país.

RWANDA

/Original: francés/

/11 de diciembre de 1973/

Surgida de la revolución social de 1959, en que las masas populares derrocaron al régimen feudocolonialista, la joven República de Rwanda se ha dado una Constitución que garantiza a todos sus ciudadanos las libertades fundamentales tal como están definidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aunque durante el decenio transcurrido los derechos del pueblo rwandés fueron escarnecidos por una política de intrigas practicada por dirigentes irresponsables, la Segunda República, instaurada el 5 de julio de 1973, se preocupa por fortalecer la defensa de los derechos del pueblo rwandés.

Cuando la agitación social causada por las intrigas políticas de los antiguos dirigentes provocó el caos político, el Alto Mando de la Guardia Nacional actuó en última instancia para salvaguardar los derechos de los ciudadanos de Rwanda restableciendo la paz y la unidad nacional.

En procura de ese objetivo, la Segunda República, bajo la dirección esclarecida de su Presidente, Su Excelencia el General de División Juvenal Habyarimana, tiene la preocupación permanente de asegurar a todos los rwandeses el goce de sus derechos sociales, económicos y culturales.

Así, en su discurso-programa de 1.^o de agosto de 1973, el Presidente de la República declaró que la nueva política socioeconómica estaría dedicada a la distribución equitativa de los servicios sociales: hospitales, dispensarios y establecimientos escolares. La movilización de las masas populares, que ha de hacerles conocer sus obligaciones y derechos, es objeto de la atención del nuevo Gobierno. La función de los departamentos sociales consistirá aun más en promover el bienestar de cada ciudadano rwandés.

En el mismo orden de ideas, el nuevo régimen garantiza una libertad total en el ejercicio de las actividades económicas, como el comercio, que se realizan en régimen de libre competencia.

Con arreglo a esta nueva orientación del país, la distribución del crédito tiene en cuenta las prioridades establecidas en el plan nacional de desarrollo, que se basa en los intereses reales del pueblo rwandés.

Como complemento de lo anterior, el Ministerio se complace en transmitir a la Secretaría de las Naciones Unidas el texto de la declaración que hizo el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, Su Excelencia el Mayor Aloys Nsekalije, con ocasión del vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que señala los principios básicos de la aplicación general de esa Declaración en Rwanda.

DECLARACION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION
CON OCASION DEL VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA DECLARACION
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

El mundo entero celebra, este 10 de diciembre de 1973, el vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por unanimidad el 10 de diciembre de 1948 durante un período de sesiones que la Asamblea General celebró en París. La aprobación unánime y solemne de tal declaración por países con sistemas sociales, culturales, económicos y políticos diferentes y aun opuestos, prueba suficientemente que ella responde a las aspiraciones profundas de la humanidad. Este es el feliz acontecimiento histórico que las naciones amantes de la paz y la libertad conmemoran hoy. La ocasión les permite hacer un balance de las realizaciones de la comunidad internacional en esta esfera.

Por su parte, Rwanda, que es Miembro de las Naciones Unidas desde hace más de diez años, se ha empeñado formalmente en aplicar en su totalidad la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es dentro de este contexto como, desde las primeras horas de nuestra independencia, la joven República se dio una Constitución en la que se garantizaban a todos los rwandeses las libertades fundamentales definidas en la Declaración Universal.

Desafortunadamente, ese entusiasmo inicial de nuestra revolución no tardó en extinguirse. Durante el decenio que acaba de transcurrir, el odio, la intriga, el nepotismo y el regionalismo imperaron en el país. Los ciudadanos rwandeses fueron despojados de sus derechos más elementales, con una malignidad y una arrogancia sin precedentes, ya que la mayor preocupación del Gobierno derrocado era buscar no el reconocimiento, el respeto y la defensa de tales derechos, sino la ventaja personal y la lucha de influencias en el ajedrez de la política interna.

Tales prácticas falsearon los objetivos de nuestra revolución social de 1959, que apuntaban a la defensa de los derechos fundamentales de las masas populares, oprimidas desde hacía mucho tiempo por el régimen secular feudocolonialista.

Con la aparición de la Segunda República, bajo la dirección esclarecida de su Presidente, Su Excelencia el General de División Juvenal Habyarimana, se buscó crear, mediante el restablecimiento de la paz y la unidad nacional, y dentro de una concordia total, una sociedad ordenada y armoniosa en la que fueran respetados los derechos de cada ciudadano. El derrocamiento del régimen anterior tuvo como objetivo primordial unir los corazones, hacer reinar la paz y la concordia en todo el país, y extirpar para siempre la alienación mental feudocolonialista.

Nos felicitamos actualmente, en esta fase de nuestra revolución, por hacer respetar los derechos del pueblo rwandés, pero hay en nuestro planeta millones de hombres que aún no gozan de sus libertades fundamentales.

El Africa meridional, Angola, Mozambique y Rhodesia son actualmente el escenario de un colonialismo innoble y retrógrado en el cual el hombre africano es rebajado al nivel animal, a pesar de la indignación general que ha causado el fortalecimiento de las medidas represivas adoptadas por los regímenes racistas, minoritarios y colonialistas en esos territorios africanos.

Lo mismo sucede en el Oriente Medio, donde las guerras desencadenadas por Israel para cumplir sus designios expansionistas siembran la desolación en esa parte del mundo y privan de sus derechos fundamentales al pueblo palestino, que erra sin patria.

Nuestra atención se dirige igualmente a los 2.500 millones de hombres sumidos en la ignorancia, la enfermedad y la miseria más sombrías, mientras que la cuarta parte restante de la humanidad nada en la más escandalosa opulencia.

Son todos esos problemas que requieren soluciones urgentes para restablecer la justicia social, la dignidad y el respeto del ser humano. La ética universal nos dice que realicemos mayores esfuerzos no sólo para derrotar las fuerzas nefastas del colonialismo, la discriminación racial y el sionismo, sino también para vencer al subdesarrollo.

Al celebrarse el vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el deseo más profundo del pueblo y el Gobierno de Rwanda es ver que el respeto de los derechos humanos esté inscrito en letras de oro entre las preocupaciones primordiales de todas las naciones.
